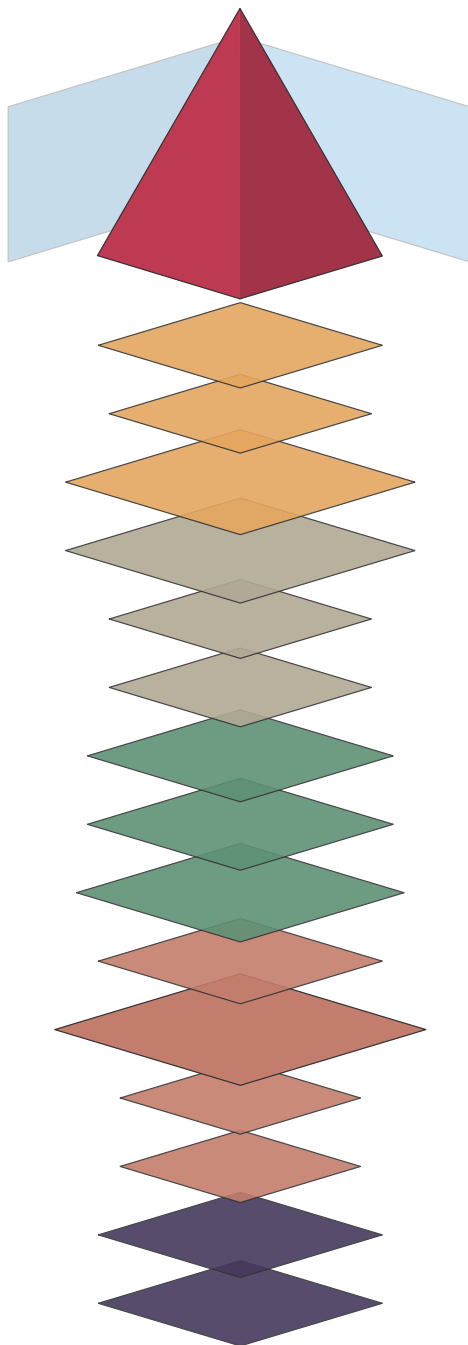




ECUADOR



7,07

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

11.º de 193 países

4.º de 35 países americanos

3.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

6,73

TRATA DE PERSONAS 6,50

TRÁFICO DE PERSONAS 6,00

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 8,00

TRÁFICO DE ARMAS 8,00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 6,00

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 6,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 7,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 7,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 7,50

COMERCIO DE HEROÍNA 6,50

COMERCIO DE COCAÍNA 8,50

COMERCIO DE CANNABIS 5,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 5,50

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 6,50

DELITOS FINANCIEROS 6,50



ACTORES CRIMINALES

7,40

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 8,00

REDES CRIMINALES 7,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 7,00

ACTORES EXTRANJEROS 8,00

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 6,50



4,88

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA



Financiamiento
proporcionado por el Gobierno
de los Estados Unidos.

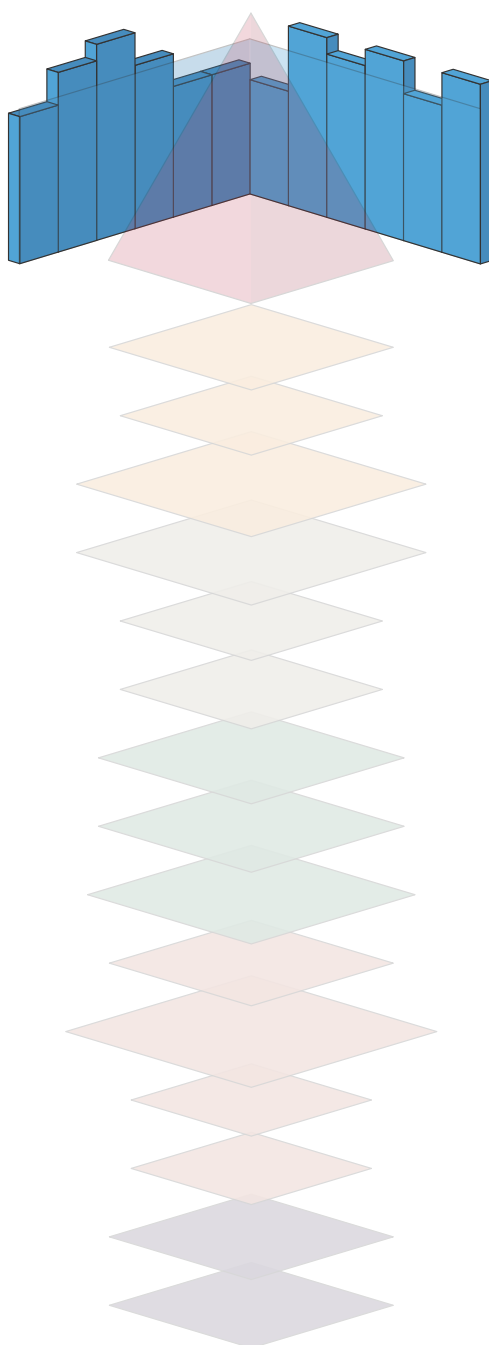


Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por
la Unión Europea e implementado por el
Institute for Security Studies e INTERPOL,
en asociación con Global Initiative Against
Transnational Organized Crime.



ECUADOR



4,88

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

96.º de 193 países

19.º de 35 países americanos

6.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	4,50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	5,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	3,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	5,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,50
PREVENCIÓN	4,50
ACTORES NO ESTATALES	5,50



7,07

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 6,73



ACTORES CRIMINALES 7,40



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata de personas, destinadas principalmente a la explotación sexual y el trabajo forzado. Las víctimas suelen pertenecer a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, ecuatorianos retornados, indígenas y jóvenes con acceso a las redes sociales, que a menudo se utilizan como herramienta de captación. En algunos casos existen conceptos erróneos sobre la legalidad de la trata, debido a ciertas prácticas culturales. En ocasiones, las víctimas son explotadas dentro de sus propios círculos familiares. El alto nivel de trata de personas y la falta de comprensión del número de grupos de crimen organizado implicados han dejado a las autoridades ecuatorianas en una posición débil. Los niños corren un riesgo especial, con informes de grupos armados colombianos que reclutan por la fuerza a niños ecuatorianos que viven a lo largo de la frontera norte. Las redes de trata de personas también están conectadas con otros tipos de delitos, como los asesinatos por encargo, el tráfico de drogas y el reclutamiento forzoso para conflictos armados.

En cuanto al tráfico de personas, la exención de visado para muchos nacionales de Ecuador ha convertido a este país en una de las principales zonas de aterrizaje para miles de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Las redes criminales transportan a personas procedentes de diversos países, como India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Cuba, Haití y Senegal, hasta Ipiales (Colombia), antes de dirigirse a América del Norte. Ha aumentado el número de ecuatorianos que cruzan el Paso del Darién: son los segundos, después de los venezolanos. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la afluencia de venezolanos que huyen de su país, lo que ha dado lugar a más rutas clandestinas de contrabando hacia Ecuador.

La extorsión y los cobros ilegales por protección se han convertido en problemas importantes en los últimos años y amenazan la habitabilidad de ciertas zonas del país. Muchas personas que huyen de Ecuador citan a «los vacunadores» o extorsionadores como una de las principales razones de su decisión de marcharse. Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos: cierran carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, asesinan a clientes y propietarios de negocios locales e incluso amenazan con actos terroristas, como colocar explosivos en gasolineras, cuando los negocios se niegan a pagar las extorsiones. También son frecuentes las llamadas de extorsión, muchas de ellas procedentes del sistema penitenciario o de delincuentes

en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El Gobierno y los cuerpos de seguridad han hecho poco para abordar este acuciante problema y los asesinatos relacionados con la extorsión se han convertido en algo habitual.

TRÁFICO

Aunque Ecuador tenía una estricta regulación de la fabricación, compra y venta de armas, el tráfico ilegal de armas ha ido en aumento en los últimos años, alimentado por las estructuras de la delincuencia transnacional. La decisión del Gobierno de facilitar a los civiles la compra legal de armas ha sido recibida con críticas, no solo porque es un reconocimiento de que el Estado no puede garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos, sino también por el alto nivel de corrupción que puede facilitar la infiltración de armas legales a actores criminales. La mayoría de las armas de fuego que circulan proceden de fabricantes artesanales locales, pero el mercado también es transnacional. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos viajan desde EUA y México a través de Ecuador y se ha informado de que narcoavionetas entran en el país con armas y dinero para ser entregadas a megapandillas que trabajan para los cárteles mexicanos. Otras fuentes de armas son Chile y Perú y las armerías de la fuerza pública. El aumento del tráfico de armas ilegales ha contribuido a un incremento de las muertes violentas y las estadísticas de asesinatos en Ecuador son las peores en una década. Dado que muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, la liberalización de la tenencia de armas podría no redundar en mayor seguridad, sino, más bien, exacerbar los niveles de violencia.

Las autoridades se han incautado de muchos medicamentos falsificados en Ecuador, sobre todo analgésicos, vitaminas y sedantes. El mercado local también está inundado de ropa y aparatos electrónicos falsos. Estos artículos se venden abiertamente y en negocios legalmente registrados, ya que el comercio no se considera ilegal. En cuanto a los productos sujetos a impuestos especiales, el aumento del comercio electrónico en Ecuador ha provocado un incremento de las prácticas comerciales ilícitas, como el contrabando. El aumento de las incautaciones de cigarrillos ilegales en el 2021 fue sorprendente, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. El comercio de cigarrillos ilegales suele estar vinculado al crimen organizado, que busca blanquear sus ganancias procedentes del narcotráfico. Se estima que más de la mitad de los cigarrillos que se consumen en el país tienen un origen ilícito. El contrabando se produce principalmente a través de pasos clandestinos en las fronteras norte y sur.

MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal sigue constituyendo una amenaza para Ecuador, que es a la vez origen y destino de la madera ilegal. Los grupos del crimen organizado pagan sobornos regulares a policías y soldados para transportar madera ilegal de Colombia a Ecuador y luego camuflar su origen, antes de exportarla legalmente a Perú. Casi la mitad de la madera que se vende en el país es ilegal, con más de un millón de metros cúbicos vendidos localmente cada año. Esta actividad ilegal ha provocado la destrucción de zonas protegidas, incluidas especies protegidas, como la caoba y el cedro. La caoba, en particular, es la especie más amenazada de la selva amazónica. Los madereros peruanos cruzan la frontera amazónica para talar cedro y caoba antes de regresar a su país por las vías fluviales. Sin embargo, Ecuador aún no ha establecido un plan con sus países vecinos para combatir esta actividad ilegal y la respuesta del Gobierno a las quejas ha sido insatisfactoria. Además, la región norteña de Pichincha, conocida por ser un centro crucial para el cultivo de orquídeas, se ve especialmente afectada. Se ha descubierto que en esta zona prospera un importante comercio ilícito de semillas de orquídeas, un problema que no ha recibido la atención que merece.

La diversa fauna de Ecuador atrae a los traficantes y las especies más traficadas son las aves, los reptiles y los mamíferos. Las especies endémicas, como las tortugas de Galápagos y las iguanas terrestres, son especialmente valiosas en el mercado internacional, por su singularidad. Aunque las campañas gubernamentales y las incautaciones han aumentado, el problema persiste y los traficantes utilizan métodos más sofisticados. La normalización de este delito en Ecuador es también una de las razones por las que la gente sigue teniendo animales exóticos como mascotas y consumiendo carne de animales silvestres, sobre todo en la región amazónica. Esto ha llevado a que muchas especies de vertebrados estén amenazadas en Ecuador, en gran parte debido al consumo doméstico. Además, son motivo de preocupación la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, especialmente por parte de embarcaciones chinas, y la corrupción relacionada con la exportación de aletas de tiburón. La pesca de tiburones no está permitida, pero sí su comercio, si se trata de una captura accidental, lo que brinda a los traficantes la oportunidad de pescar tiburones, pero declararlos bajo esta figura. El exceso de capturas accidentales es también una de las razones por las que la carne de tiburón se encuentra habitualmente en los mercados de pescado y se vende a los clientes como un tipo de pescado de consumo habitual.

Los delitos contra los recursos no renovables en Ecuador son cometidos principalmente por redes criminales nacionales, pero recientemente la minería ilegal ha visto la participación de grupos de tipo mafioso colombianos en las zonas fronterizas. La cordillera del Cóndor es una zona donde mineros ilegales ingresan a Perú para extraer oro que luego procesan del lado ecuatoriano. En la provincia de Esmeraldas, la minería ilegal se ha desarrollado para

sustituir a la economía criminal anteriormente dominante de suministro de armas a la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, la minería ilegal en Napo afecta gravemente a los ríos y a la biodiversidad de la región amazónica, donde los fiscales se han incautado de importantes cantidades de equipos de minería ilegal. El contrabando de combustible y gas natural licuado de Ecuador a Perú y Colombia es el delito más perjudicial para el Estado, debido a que los subsidios hacen que los precios de estos productos sean más baratos que los de otros países latinoamericanos. Redes criminales compuestas por ecuatorianos, peruanos y colombianos se lucran vendiendo combustible de contrabando en el extranjero. Agentes estatales de bajo nivel, como policías, soldados y otros funcionarios del Gobierno, facilitan el transporte de estas y otras mercancías ilícitas. También se sospecha que las autoridades de alto nivel pueden permitir a los mayores contrabandistas transportar grandes cantidades fuera del país.

DROGAS

Ecuador es tanto un país de destino como de origen de drogas, especialmente heroína y cocaína. En el caso de la heroína, el opio peruano se transporta a Ecuador, mientras que la heroína colombiana se exporta a Estados Unidos. Se ha descubierto a miembros de la Policía avisando a los traficantes de sus operaciones, proporcionándoles seguridad e incluso, presuntamente, planeando asesinatos con jefes criminales locales. Como resultado, las redes colombianas de microtráfico se han apoderado del mercado de la droga y han establecido un control sobre los barrios desfavorecidos, a través de redes de distribución y seguridad. Esto ha creado una situación en la que las drogas, el trabajo sexual y las armas están muy extendidos y los tiroteos son habituales. Los adolescentes son especialmente vulnerables y el consumo de heroína comienza a los 14 años. A menudo se mezcla con otras drogas, para crear un ciclo de adicción constante.

En los últimos años, Ecuador se ha convertido en una superautopista de la cocaína, debido al tráfico a gran escala a través de sus puertos del Pacífico, así como al creciente mercado interno. El narcotráfico está controlado en gran medida por grupos mafiosos y cárteles mexicanos, colombianos y albaneses que se asocian con bandas locales. Como consecuencia, Ecuador es uno de los principales países de origen de la cocaína hacia Europa. Este aumento de la producción de drogas también ha provocado un incremento de las tasas de homicidio en la última década, lo que demuestra una correlación directa con la amplificación del flujo de drogas. Aunque el Gobierno actual alega que la guerra entre bandas en el país se debe a las incautaciones récord realizadas por las autoridades, se atribuye más bien al hecho de que las cantidades incautadas en las operaciones antidroga son cada vez mayores. La corrupción es un factor importante y el fácil acceso a precursores y productos químicos elaborados en Ecuador ha reducido el riesgo y el coste de la fabricación de cocaína en el

país. Los narcotraficantes se aprovechan de la ausencia de funcionarios gubernamentales en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, donde la mayor parte de la droga se traslada a los puertos por carretera. El resultado es que la droga suele esconderse entre la carga legal. Los grupos del crimen organizado también pasan de contrabando sustancias químicas líquidas, como el éter, de Ecuador a Colombia y a Perú, para procesar la cocaína. De este modo, Ecuador se está convirtiendo en un importante país de tránsito de precursores químicos.

Mientras tanto, el cultivo de marihuana en Ecuador no puede abastecer el mercado local y la variedad más demandada, *creepy*, se importa de Colombia. Ecuador también se utiliza como país de tránsito para introducir esta droga en Perú y en Chile. El comercio ilegal de *creepy* genera grandes beneficios y atrae el interés de organizaciones criminales internacionales, entre ellas las mafias colombianas, mexicanas y brasileñas. Los grupos de crimen organizado que trafican con cannabis son especialmente activos en Esmeraldas, en la frontera con Colombia. En cuanto a las drogas sintéticas, las pastillas de éxtasis o metanfetamina son accesibles para el mercado local y los traficantes se dirigen a los consumidores jóvenes, vendiéndolas incluso fuera de las escuelas. La ketamina procedente de Ecuador se introduce de contrabando en Colombia, debido a su precio más bajo, pero también hay informes de que el 2C-B, que contiene ketamina, se produce en la región colombiana de Pereira y se transporta a Ecuador.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los ciberataques a instituciones privadas y gubernamentales han aumentado considerablemente en los últimos años. Los sectores más afectados son las empresas de telecomunicaciones, la Policía, la autoridad de tránsito y los bancos privados. En un caso, un ataque de ransomware secuestró información crítica de una empresa estatal de telecomunicaciones y obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia. No está claro si esta declaración se utilizó para movilizar fondos públicos para pagar el rescate, ya que el caso se ha mantenido en secreto. Además, se sospecha que el ciberataque a la autoridad de tránsito fue una represalia de una red de funcionarios que, en connivencia con los delincuentes, expedían licencias fraudulentas en todo el país. En cuanto a otros casos menores, la mayoría de los ataques denunciados proceden del extranjero.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros son un problema prevalente en Ecuador y el tipo más común son los esquemas Ponzi. Se ha descubierto que policías y militares son participantes claves e incluso socios en las estafas financieras más notorias del país. Estos individuos ven en estos esquemas una forma atractiva de invertir fondos obtenidos mediante la corrupción y los sobornos. Por ello, las autoridades han

advertido a la población que tenga cuidado al invertir dinero en empresas o fondos sospechosos que ofrecen rendimientos inusualmente altos, ya que miles de ecuatorianos han confiado su dinero a captadores ilegales.

Otra forma generalizada de delincuencia financiera en Ecuador es la evasión de impuestos, por la que el país pierde casi la mitad de la recaudación anual del fisco. De hecho, el impago del impuesto sobre la renta por parte de las empresas ecuatorianas es uno de los más altos de América Latina. El fraude digital también está muy extendido, con contadores y estafadores que operan a través de las redes sociales. Además, la corrupción en los sistemas de seguridad social y de salud es rampante, con millones de dólares perdidos por malversación, lo que ha desfinanciado a estas instituciones. En consecuencia, hay una crisis en los hospitales de la seguridad social, donde los pacientes tienen que comprar sus propias medicinas y otros suministros médicos que deberían proporcionarse gratuitamente.

Además, las cibermafias en Ecuador se dedican al phishing, infectando ordenadores y teléfonos móviles a través de enlaces maliciosos, creando sitios web fraudulentos de comercio electrónico y pirateando redes sociales.

ACTORES CRIMINALES

El crimen organizado es un problema grave en Ecuador, donde grupos de tipo mafioso locales y extranjeros colaboran en actividades delictivas, como el narcotráfico, el sicariato, la extorsión, la minería ilegal y el blanqueo de dinero. Los grupos locales tienen miembros más moderados que las organizaciones internacionales, pero facilitan el transporte y apoyan otras actividades delictivas. Aunque no controlan el territorio, algunos tienen el control del sistema penitenciario y despliegan altos niveles de violencia. La lucha entre grupos mafiosos por el control de las rutas del narcotráfico ha desembocado en una guerra de bandas que tiene graves repercusiones en la sociedad, con amenazas terroristas cada vez más frecuentes. Las fuerzas policiales y militares son incapaces de hacer cumplir la ley, lo que permite que el país se convierta en un centro del crimen organizado. Esta guerra también ha provocado la muerte de cientos de personas, debido a los constantes brotes de violencia en el sistema penitenciario.

Además de los grupos locales, en Ecuador operan varias organizaciones delictivas internacionales, como las de Colombia, México, Albania y China. Los grupos colombianos controlan una parte considerable de las rutas de tráfico ecuatorianas, incluidas las rutas marítimas a lo largo de la costa del Pacífico, donde el Estado tiene poco control. También hay una presencia creciente de grupos delictivos balcánicos implicados en el tráfico de drogas, cuyas tácticas violentas y terroristas están siendo imitadas por grupos locales en la lucha por el control de las rutas de tráfico hacia Europa. Además, al parecer las bandas brasileñas están interesadas en ampliar sus rutas de tráfico a Ecuador,

lo que podría provocar un sangriento enfrentamiento con los cárteles mexicanos que operan en la región. Los grupos asiáticos se dedican sobre todo al tráfico de personas. La presencia de estas organizaciones delictivas internacionales ha provocado una pérdida de confianza de la población en la capacidad del Estado ecuatoriano para controlar su territorio y proteger a sus ciudadanos.

Las redes criminales sueltas operan en todo Ecuador y se dedican principalmente a mercados delictivos como el tráfico de drogas y de personas, el contrabando de personas y la minería ilegal. Estos grupos operan a nivel provincial o de ciudad y algunos se disputan violentamente el mercado del narcotráfico en Guayaquil. Se cree que las organizaciones delictivas operan desde dentro del sistema penitenciario, donde utilizan la violencia, incluidas las extorsiones y los asesinatos. También se informa de la presencia de bandas de asesinos a sueldo que tienen acceso a armas de gran potencia. Las prisiones se han convertido en el ecosistema criminal perfecto para la proliferación del crimen organizado.

La corrupción es endémica en Ecuador, con agentes estatales implicados en el tráfico de drogas y de oro ilegal en mercados delictivos. Funcionarios que van desde policías y militares hasta jueces y fiscales han sido acusados de facilitar estas actividades a cambio de sobornos o favores. Algunas redes criminales también han obtenido armas militares,

munición y explosivos a través de funcionarios corruptos. En el mercado de la trata de personas, se ha denunciado que funcionarios corruptos ecuatorianos forman parte de grupos de delincuencia organizada, actuando como informadores sobre la ocurrencia y el momento de las operaciones de los cuerpos de seguridad y facilitando las operaciones mediante la obtención de documentos de identidad falsificados. Esto provocó la falta de confianza de las víctimas en la Policía y su reticencia a denunciar posibles casos.

En Ecuador, el crimen organizado blanquea sus ingresos principalmente a través de los sectores de la construcción y el comercio. Los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras aceptan recursos procedentes de actividades ilícitas para financiar grandes proyectos de viviendas, oficinas e infraestructuras. A pesar del impacto de la pandemia de la COVID-19 en la economía y el sector inmobiliario, el auge de la construcción en las principales ciudades del país no se detuvo. Otros negocios legítimos utilizados para reinvertir fondos ilícitos son las ferreterías y los concesionarios de automóviles. En las provincias del sur también se han creado pseudocooperativas de ahorro y crédito como mecanismos para blanquear dinero y se ha descubierto que algunas forman parte de redes criminales de millones de dólares.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La falta de liderazgo del actual Gobierno ha provocado un estancamiento político y un retroceso democrático. El capital político del Gobierno se ha agotado, dejándolo prácticamente sin aliados y con el rechazo de la mayoría de la población. De hecho, el presidente tiene uno de los índices de aprobación más bajos de América Latina, como lo demuestra su derrota en el referéndum que convocó contra el crimen organizado. El fracaso del actual Gobierno puede atribuirse en parte a la desinstitucionalización del Estado, que ha llevado a que todas las áreas adolezcan de mala planificación y ejecución, a pesar de contar con fondos suficientes. La falta de capacidad del gabinete presidencial ha llevado a un deterioro de los cuerpos de seguridad y de los servicios públicos, lo que ha sido aprovechado por los grupos mafiosos para ganar territorio. Actualmente, el país experimenta un fuerte aumento de la tasa de homicidios, que pone fin a una década de descensos, una extorsión desenfrenada y una creciente amenaza terrorista. La presión para reducir el tamaño del sector público en Ecuador ha llevado al Gobierno a eliminar importantes instituciones. Ecuador es el único país de la región que no tiene un Ministerio de Justicia y la entidad pública de planificación,

que fue disuelta durante el Gobierno anterior, no ha sido adecuadamente reinstitucionalizada por el actual, lo que ha dado lugar a políticas e inversiones públicas deficientes. Además, la lenta respuesta del Gobierno a los casos de corrupción relacionados con la infiltración de la mafia del narcotráfico en la élite política ha empeorado la ya de por sí escasa confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales. La capacidad de las instituciones públicas encargadas de velar por la transparencia y la rendición de cuentas se ha visto mermada como consecuencia de las acusaciones de blanqueo de dinero y soborno, junto con las complicaciones en el proceso de selección de nuevos funcionarios. El acceso a la información en Ecuador también es deficiente.

A pesar de que Ecuador ha firmado y ratificado numerosos tratados y convenciones internacionales para luchar contra el crimen organizado y de que ha recibido apoyo de Estados Unidos, como cursos de capacitación, equipamiento y financiación de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley para reforzar su lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, todavía hay áreas que necesitan mejorar. Ecuador aún no ha

ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas y algunos de sus acuerdos de extradición deben actualizarse para ser más eficaces. Aunque el país cuenta con leyes adecuadas para luchar contra el crimen organizado, los recursos para hacerlas cumplir son insuficientes.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Ecuador carece de independencia, lo que limita su capacidad para investigar eficazmente la corrupción y el blanqueo de dinero, debilitando así el Estado de derecho. Se considera que el sistema judicial facilita la delincuencia, ya que muchos jueces han liberado a delincuentes, líderes mafiosos y asesinos, abusando de las lagunas en materia de jurisdicción, lo que permite a cualquier juez pronunciarse sobre casos que no corresponden a sus ciudades. Además, también se ha acusado a los fiscales de presentar casos deficientes, lo que deja a los jueces sin otra opción que liberar a los delincuentes. Los agentes de la Policía se han quejado de que el Poder Judicial frustra los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. El sistema penitenciario de Ecuador es muy disfuncional, ya que el Estado tiene poco o ningún control sobre las distintas prisiones, que se han convertido en focos de delincuencia. La crisis penitenciaria en Ecuador se encuentra actualmente en el peor momento de su historia, con cientos de personas asesinadas, debido a conflictos entre bandas. La sobrepoblación de las prisiones es otro factor que alimenta la violencia.

La Policía Nacional de Ecuador cuenta con una unidad dedicada a la lucha contra el crimen organizado, pero se enfrenta a dificultades debidas a la escasez de recursos, los retrasos burocráticos y las frecuentes rotaciones de policías especializados. A pesar de haber sido reconocida en su día como una de las instituciones más profesionales y mejor pagadas de Latinoamérica, el Gobierno actual y los anteriores han permitido que la infraestructura, los vehículos y el equipamiento de los cuerpos de seguridad se deterioren considerablemente. Además, la reducción del presupuesto y del número de unidades de Policía de proximidad en todo el país ha permitido a los grupos delictivos hacerse con el control de ciertas zonas. La Policía Nacional ha perdido credibilidad, a raíz de crímenes de gran repercusión en los que se han visto implicados policías en activo.

La frontera norte con Colombia sigue siendo un reto para la Policía, debido al terreno selvático. La región Putumayo-Caquetá tiene la mayor superficie de cultivo de coca, que se ve afectada por la presencia de actores armados ilegales nacionales y grupos delictivos transnacionales. Debido a su posición entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína, el tráfico de esta droga se está apoderando del país, ya que sirve de principal tránsito para los países consumidores, debido al repliegue del Estado. Su posición y su economía dolarizada también hacen de Ecuador un destino popular para que los narcotraficantes y los cárteles blanqueen dinero. Ecuador también se ha convertido en un objetivo popular de los ciberataques y se

considera uno de los países más vulnerables a estos delitos de la región. El Gobierno de Ecuador está poco preparado para los ciberataques y las investigaciones no han dado ningún resultado. La falta de capacidad de prevención y protección es la principal razón.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Ecuador cuenta con una ley contra el lavado de dinero desde el 2005, con penas de prisión que oscilan entre uno y 13 años, dependiendo de la suma de dinero blanqueada y del nivel de implicación de la persona condenada. A pesar de que Ecuador no figura en ninguna lista negra de blanqueo de dinero, existe un alto riesgo de que este delito se perpetre y se utilice para la financiación del terrorismo. A pesar de las numerosas denuncias presentadas, pocos casos terminan en condena. Las investigaciones avanzan a un ritmo lento, con investigaciones preliminares de blanqueo de capitales que duran hasta dos años, a veces incluso más, cuando las cantidades blanqueadas son elevadas e implican a empresas. Esto se agrava por la falta de financiamiento del Estado, que se ha reducido en los últimos años. Pichincha y Guayas son las provincias donde más se han reportado estos casos. Los sectores económicos más utilizados para las actividades delictivas son la minería, el sector inmobiliario, la venta de autos, la banca, el turismo y el espacio de las ONG.

La tasa de crecimiento económico de Ecuador ha disminuido, debido al descenso de la inversión y el gasto estatales. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha obtenido préstamos del FMI y el Banco Mundial, lo que ha dado lugar a reformas económicas, como recortes fiscales e incentivos crediticios para los empresarios. Sin embargo y a pesar del discurso actual sobre la responsabilidad fiscal, la deuda pública ha alcanzado niveles históricos, poniendo en peligro el bienestar económico de la economía nacional y de los futuros gobiernos. A pesar de estos retos, las agencias internacionales de evaluación de riesgos siguen clasificando a Ecuador como un país de riesgo moderado.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Ecuador estableció en el 2014 un sistema nacional de protección y asistencia a víctimas y testigos. Sin embargo, el programa cuenta con recursos limitados y los agentes de la Policía Judicial proporcionan esta protección, en lugar de que lo hagan soldados o guardias de seguridad privados. Esto ha dado lugar a quejas de que la asistencia está condicionada al nivel de participación de las víctimas o los testigos en el proceso judicial. Además, el sistema no cumple las normas internacionales de accesibilidad y el derecho a recibir asistencia depende de criterios subjetivos, aplicados por funcionarios públicos.

La Policía lanza ocasionalmente campañas de prevención contra el tráfico de drogas, la compra de bienes robados, la trata de personas, la violencia en los estadios de fútbol y la usura, entre otros. Trabajan con las comunidades a

través de unidades de Policía comunitarias, que operan en todo el país. Sin embargo, el cierre de varias de estas unidades, aparentemente por falta de eficacia, ha debilitado considerablemente las estrategias generales de prevención.

El Gobierno ecuatoriano tiene poder regulador sobre las ONG, incluida la autoridad para disolverlas por participar en política o por actividades que se aparten de sus objetivos declarados. A pesar de los avances realizados en este ámbito por las últimas administraciones, los observadores siguen afirmando que el Ejecutivo conserva un poder regulador excesivo sobre los medios de comunicación y las ONG, debido a las normativas aplicadas durante la anterior administración. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la investigación de delitos, especialmente los de corrupción en los que está implicado el Estado. Sin embargo, el Gobierno no garantiza la libertad de prensa en la práctica. Los periodistas que cubren fuentes de seguridad, judiciales y policiales se enfrentan a amenazas en vídeos virales, llamadas telefónicas y mensajes agresivos. Esmeraldas, un centro neurálgico de operaciones del narcotráfico, la tala y la minería ilegal, además de otros delitos, es un ejemplo de una localidad donde la prensa local es incapaz de sacar a la luz miles de casos, debido a la intimidación y el miedo a las organizaciones criminales.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.